

“Operativo Cóndor”: ¿un ancestro vergonzoso?

Alfredo Boccia Paz

Cuadernos para el Debate N° 7

Programa de Investigaciones Socioculturales
en el Mercosur
Instituto de Desarrollo Económico y Social



Presentación

El Programa de Investigaciones Socioculturales en el Mercosur comenzó sus tareas a principios de 1997 en el IDES, con el antecedente de la organización de la Red de Investigadores Sociales del Mercosur con el apoyo del Programa MOST de la UNESCO en 1996. Desde entonces, el Programa ha iniciado el desarrollo de una diversidad de proyectos colectivos e individuales y ha realizado un seminario permanente de investigación en el que han presentado sus trabajos investigadores nacionales e internacionales. Los participantes del Seminario y los miembros del equipo del Programa representan un conjunto heterogéneo de disciplinas: sociología, antropología, psicología, historia, educación, ciencia política, comunicación, entre otras. Del mismo modo, converge en el Programa una cierta gama de enfoques conceptuales. Esta convergencia de disciplinas y enfoques ha potenciado el intercambio y la profundización de las principales preocupaciones: las transformaciones en las percepciones y relaciones entre nosotros/los otros en el marco de los procesos de regionalización. Este interrogante inicial se ha plasmado en el análisis de referentes empíricos específicos que abarcan movimientos sociales, espacios fronterizos y distintos actores e instituciones involucrados en las nuevas dinámicas de la interacción.

La edición de estos *Cuadernos para el Debate* es un nuevo paso para la difusión de trabajos realizados y la ampliación de los circuitos y las formas de intercambio. A través de este medio pretendemos dar a conocer los avances de los participantes del seminario y miembros del programa, así como eventualmente trabajos realizados en otras regiones aún desconocidos en español o portugués.

Elizabeth Jelin y Alejandro Grimson

Nº 7, Buenos Aires, octubre de 1999

Los *Cuadernos para el Debate* se publican gracias al patrocinio de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (PICT/97) y de la FUNDACIÓN ROCKEFELLER.

El trabajo que recoge este Cuaderno fue expuesto como ponencia en el Seminario-Taller Internacional «Movimientos sociales y ciudadanía más allá de la nación», organizado por el Programa de Investigaciones Socioculturales en el Mercosur, IDES, Buenos Aires, 23 y 24 de agosto de 1999.

ALFREDO BOCCIA PAZ es investigador de la historia contemporánea en Paraguay.

“Operativo Cóndor”: ¿un ancestro vergonzoso?

ALFREDO BOCCIA PAZ

Introducción

Los procesos de integración regional en América Latina plantean desafíos e incógnitas que surgen desde las perspectivas y posibilidades que se abren. Los desafíos están vinculados a la capacidad de fortalecer nuevos planos de convivencia e interrelación entre las sociedades de la región a partir de los fracasos y las postergaciones de los intentos previos. Las incógnitas se construyen desde la percepción de vulnerabilidad e incertidumbre colectiva al transitar un camino desconocido y en evolución constante. Con frecuencia se insiste en que se trata de una experiencia inédita olvidando que dos décadas antes los países de la región ensayaron por varios años una alianza cooperativa sin precedentes en un plano muy distinto al del actual Mercosur. En la segunda mitad de los años setenta las dictaduras militares del Cono Sur coordinaron clandestinamente, de manera asombrosamente eficaz, sus estructuras represivas de modo de enfrentar lo que, en la época, consideraban como enemigo común: los movimientos izquierdistas y populares y las organizaciones políticas y sociales contestatarias.

Más allá de los juicios de valor sobre sus objetivos, el “Operativo Cóndor” es la prueba de que no todo es nuevo en los procesos de integración regional. Por ese motivo, una mirada al pasado –con sus hechos vergonzosos y sus dolorosas secuelas– puede aportar algunas

claves para comprender el futuro común que se piensa construir en el subcontinente.

Integración: una exigencia coyuntural

Tal como ocurriría dos décadas después con el Mercosur, el “Operativo Cóndor” pudo concretarse por la existencia de una coyuntura política regional que le serviría de sustrato ideológico y justificación moral. A pesar de su diferente desarrollo histórico y sus matices propios, los procesos políticos de los países de la región mostraban una notable coincidencia. En todos ellos, en los primeros años de la década de los setenta, gobernaban dictaduras militares de derecha.

En la Argentina, las elecciones de marzo de 1973 reflejaron el renacer del peronismo después de casi veinte años de exilio del líder. Sin embargo, el país iniciaba una espiral de violencia política y social de signos antagónicos. La radicalización de la izquierda que optó por la preparación de la lucha armada (Montoneros, ERP, entre otros) se enfrentaría a la violencia estatal desatada por las bandas paramilitares (Triple A, entre otras). La crisis se agravó con la muerte de Perón. El breve y caótico gobierno de Isabel fue derribado por un golpe militar en marzo de 1976. Un proceso similar se había dado tres años antes en el Uruguay donde la prolongada tradición democrática dio paso, en junio de 1973, al autogolpe de Bordaberry. Chile comenzó a vivir la opresión militar en setiembre de 1973 cuando el gobierno de Unidad Nacional de Salvador Allende fue derrocado cruentamente por los militares chilenos encabezados por el general Augusto Pinochet.

Bolivia estaba bajo el dominio de Banzer y los militares desde agosto de 1971, cuando fue derrocado el general Juan José Torres. En Brasil, los gobiernos militares de facto ya llevaban una década de antigüedad. En el Paraguay, el dictador Alfredo Stroessner reinaba desde 1954.

El soporte ideológico de todos estos regímenes era la llamada *Doctrina de Seguridad Nacional*. Todos los gobiernos de la región estaban adscritos a ese esquema bipolar que les permitía visualizar a los movimientos de izquierda como “enemigos comunes”, no importaba cuál fuera su nacionalidad. En las montañas de documentos secretos de los llamados “archivos del horror”, descubiertos en Asunción en 1992, se encontraron algunas ponencias paraguayas en reuniones de los ejércitos regionales:

“No se puede negar la necesidad de una eficiente coordinación de actividades de inteligencia entre los Ejércitos de Paraguay y Argentina como el mejor medio para coartar el logro de los planes elaborados por los grupos subversivos. (...) Las fuerzas subversivas están coaligadas, atravesando las fronteras nacionales, e intentando un movimiento continental” (Archivos paraguayos. VII Conferencia Bilateral de Inteligencia Paraguay y Argentina, 1975).

“...los efectos de estos movimientos los sentimos en escala nacional, pero no ignoramos que la conspiración es de escala internacional. Paraguay, por su posición tradicionalmente anticomunista y por su estratégica posición geográfica, es el país objetivo del momento. Instalado aquí el marxismo, las espaldas de nuestros vecinos quedan expuestas. De ahí la necesidad de una colaboración estrecha, franca y fluida, que no es ayuda de nadie a nadie, sino autodefensa compartida por todos en la común necesidad de defender nuestras instituciones y nuestro modo de vida” (Archivos paraguayos. IV Conferencia Bilateral de Inteligencia entre los Ejércitos de Paraguay y Brasil, abril de 1976).

Las dictaduras militares del Cono Sur tenían bien controlado al enemigo interno. Lo más temido estaba, en realidad, más allá de sus fronteras. Los países con dictaduras más antiguas como Paraguay y Brasil habían desarticulado a sus principales movimientos de oposición. En la Argentina y Chile se había iniciado en esos años una represión masiva que había ya causado la desaparición de miles de personas. En Uruguay, si bien la metodología del “detenido-desapare-

cido” fue utilizada en menor escala, sumaban miles los ciudadanos apresados. La persecución a opositores bolivianos había obligado a muchos de éstos a buscar refugio en países vecinos.

Esta era la cuestión clave. Miles de ciudadanos del Cono Sur buscaban escapar a la represión de sus países de origen refugiándose en países fronterizos. Esta migración clandestina y no controlada colocaba a los enemigos potenciales fuera del alcance de los órganos de seguridad nacionales. Frente a la nueva coyuntura era necesario establecer una estrategia común de defensa. La idea era inusual y muy difícil de imaginar unos años antes. Debía superar ciertos esquemas tradicionales en los que imperaban los nacionalismos y hasta enfrentamientos y serios conflictos de frontera, tal como ocurría entre Chile y la Argentina. La propuesta inicial, surgida en Chile, requería la utilización de códigos comunes de información, compartir archivos confidenciales sobre los detenidos y permitir el libre movimiento de agentes extranjeros por los territorios de países vecinos.

Sin embargo, las dictaduras lo resolvieron con gran pragmatismo. Es cierto que no se requerían consultas populares o negociaciones con complicados actores políticos como ocurre hoy con el Mercosur, pero no deja de sorprender la rapidez con que el “Operativo Cóndor” pasó de los proyectos a la etapa de ejecución. En el sentido más amplio y literal de la palabra. El pueblo tardaría varios años en enterarse de la existencia del operativo. Un operativo que, sin embargo, estaría en marcha muy pocos meses después de ser esbozado.

Primavera en Santiago

Nunca se hubiera sabido donde se originó el “Operativo Cóndor” si en los Archivos de Horror de Asunción no hubieran quedado pistas exactas de las primeras reuniones, en noviembre de 1975, en la capital chilena. Los jefes de Inteligencia Militar de los países de la

región recibieron una invitación del coronel Manuel Contreras Sepúlveda para una “reunión de trabajo” catalogada como “estrictamente secreta”. Contreras era el jefe de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), órgano creado poco tiempo después del golpe de 1973. Contaba con la absoluta confianza de Pinochet y había sido llamado a ese cargo para coordinar la búsqueda y captura de los activistas del MIR y otros opositores chilenos. En el cuartel general de la DINA de la calle Marcoleta, número 90, se diseñó lo que sería el operativo de coordinación represiva internacional más importante de las últimas décadas. El programa que acompañaba a la invitación especificaba “un mínimo de tres delegados por país invitado”.

No era casual que la idea hubiera partido de Pinochet. La dictadura chilena se enfrentaba, más que ninguna otra, a la realidad de que los activistas sobrevivientes al terrorismo de Estado impuesto desde 1973 habían partido al exilio y se reagrupaban allí. Los “fundamentos” de la propuesta chilena expresaban que:

“...la Subversión ha desarrollado mandos continentales, regionales y subregionales centralizados para coordinar las acciones disociadoras. (...) En cambio los países que están siendo agredidos política, económica y militarmente (desde adentro y afuera de sus fronteras) están combatiendo solos o, cuando más, con entendimientos bilaterales o simples acuerdos de caballeros. Para enfrentar esta guerra psicopolítica, hemos estimado que debemos contar no sólo con un mando centralizado en su accionar interno, sino con una coordinación eficaz que permita un intercambio oportuno de informaciones y experiencias además de cierto grado de conocimiento personal entre los jefes responsables de la seguridad” (Archivos paraguayos. Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional, 1975).

La proposición consistía en crear un banco de datos unificado, tal como el de la Interpol en términos criminales, pero dedicado al combate a la subversión. Para ello era necesario un sistema de comunicaciones ágil y uniforme y frecuentes reuniones de coordinación bi

o multilaterales. La DINA pretendía que la sede del sistema estuviera en Santiago y que la dirección fuera rotativa. Se sugería que “el personal técnico tenga inmunidad diplomática y que esté agregado a su respectiva representación”. De hecho una de las claves del funcionamiento del operativo recaería en los agregados militares de las embajadas de la región.

No todos los pasos de la propuesta chilena fueron puestos en práctica. Pero desde aquellos días de Santiago las estructuras represivas del Cono Sur darían un paso cualitativo importante en su cooperación. El “Operativo Cóndor” no inventó nada nuevo. En los años anteriores, la Triple A había secuestrado a ciudadanos brasileños y chilenos; comandos paramilitares brasileños habían actuado en territorio argentino y la policía paraguaya había entregado a detenidos políticos argentinos presos en Asunción. Sólo sistematizó e hizo más efectiva una larga tradición de cooperación subterránea entre policías y militares de la región. Una cooperación que había sido alentada y apoyada por la CIA desde el final de la Segunda Guerra Mundial pero que ahora cobraba vuelo de manera autónoma.

El financiamiento y ayuda técnica norteamericana se había canalizado desde entonces a través de varias agencias de cooperación con los organismos represivos de 19 países del continente y con la formación de militares latinoamericanos en numerosas escuelas militares en los Estados Unidos y en la Zona del Canal de Panamá. Sin embargo, un proyecto como el que empezó a diseñarse en Santiago parecía exótico a los ojos norteamericanos pues requería una transformación radical de los hábitos fuertemente nacionalistas de los distintos servicios de inteligencia. Se enterarían de su existencia cuando resonaran los ecos de uno de los primeros objetivos del operativo: el asesinato a distancia de opositores.

Los largos vuelos del cóndor

En octubre de 1975 el patriarca demócrata cristiano y cuatro veces vicepresidente de Chile Bernardo Leighton y su esposa fueron heridos en la ciudad de Roma, donde vivían luego de haberse exiliado en 1974. En la preparación del atentado, se supo después, participaron un ex agente de la CIA llamado Michael Townley, un cubano de nombre Virgilio Paz y algunos sicarios de la “Vanguardia Nacional”, una fracción de la extrema derecha italiana. Eran los primeros agentes internacionales que Contreras lograba sumar a la DINA.

En mayo de 1976 fueron las fuerzas de inteligencia uruguayas las que ensayaron con éxito un gran operativo internacional. Zelmor Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz eran dos destacados militantes del movimiento democrático uruguayo. Ambos habían sido parlamentarios y se habían exiliado en Buenos Aires tres años antes. Ambos fueron secuestrados el mismo día en operativos en los que participaron agentes paramilitares argentinos y uruguayos con total impunidad. Los cadáveres de ambos fueron encontrados en las afueras de la ciudad con disparos en la cabeza en una camioneta en la que también estaban los cuerpos del matrimonio Vitlav, emigrados políticos uruguayos.

Cinco meses más tarde, en octubre de 1976, fueron los agentes de Banzer quienes se animaron a armar un operativo conjunto con agentes argentinos para asesinar al más prominente de los opositores al régimen dictatorial: el ex presidente Juan José Torres, exiliado en Buenos Aires y empeñado en unificar los sectores que resistían a Banzer. Secuestrado cerca de su casa, su cuerpo fue encontrado 36 horas después a cien kilómetros de Buenos Aires con tres disparos en la nuca. Como en los casos anteriores, ninguna investigación seria fue llevada adelante.

Sin embargo, el más audaz de los asesinatos del “Operativo Cóndor” ocurriría nada menos que en Sheridan Circle, en pleno ba-

rrio de las embajadas de Washington. Allí, el 21 de setiembre de 1976, una bomba hizo volar por los aires el automóvil que transportaba al ex canciller chileno Orlando Letelier y a sus colaboradores norteamericanos, los esposos Moffit. Varios años de investigaciones demostrarían que el asesinato fue planificado en Santiago por el brigadier Pedro Espinoza. Este coordinó un grupo de trabajo integrado por los agentes de la DINA capitán Armando Fernández Larios y Liliana Valker, los ya citados Michael Townley y Virgilio Paz, activistas de la organización ultraderechista argentina “Milicia” y personeros del gobierno paraguayo como el jefe del protocolo presidencial, Conrado Pappalardo, quien inicialmente gestionó las visas de los sicarios con identidades falsas.

El método utilizado fue similar al del atentado realizado dos años antes contra el general Carlos Prats, ex ministro de Salvador Allende. Prats y su esposa Sofía murieron al explotar una bomba debajo del auto en el que viajaban en el barrio de Palermo de Buenos Aires.

En febrero de 1977, uno de los más caracterizados enemigos políticos de Stroessner, el médico Agustín Goiburú fue secuestrado en la entrerriana ciudad de Paraná (Argentina) por un comando integrado por agentes paraguayos y argentinos. Su cuerpo nunca más fue encontrado. Los “archivos del horror” del Paraguay probarían algo siempre sospechado: el secuestro fue planeado y solventado por las fuerzas de seguridad del Paraguay. Un documento, con membrete del lujoso Hotel Guaraní de Asunción, explica el plan que sería ejecutado en la semana siguiente:

“...Se han marcado sus itinerarios, horarios de entrada, salida y atención de la clientela. El atentado se realizará en el trayecto de la Clínica a su domicilio. Se han marcado los lugares posibles y está todo arreglado para su regreso de vacaciones que se llevará a cabo a mediados de febrero. Intervendrá un solo grupo de cuatro hombres, con dos vehículos y armas adecuadas, cuyo manejo y prácticas se

están ensayando (...)” (Archivos paraguayos, documento sin firma, febrero de 1977).

Los asesinatos de políticos notables más allá de las fronteras de sus países de origen tenían, quizá, más resonancia en la prensa, pero todos los días en todos los países del Cono Sur ocurrían hechos e incidentes que formarían parte de uno de los períodos más negros de la historia sudamericana.

Los tentáculos del “Operativo”

Además de los chilenos y uruguayos que buscaron refugio en la Argentina a mediados de los setenta, se encontraban allí desde muchos años atrás, centenares de exiliados paraguayos y bolivianos que habían salido de sus países por motivos políticos y económicos. Cuando los militares se hicieron cargo del poder en la Argentina, en marzo de 1976, ningún país de la región sería seguro para estos refugiados. Para empeorar su suerte, el “Operativo Cóndor” empezó a funcionar con todo vigor y eficacia. Se calcula que la represión durante esos años en el Cono Sur se cobró más de 30.000 muertos y desaparecidos y una cifra diez veces superior de encarcelados.

Los operativos conjuntos de elementos represivos de dos o más países empezaron a ser comunes. Los detenidos eran interrogados, torturados y “desaparecidos” con la misma libertad e impunidad que lo eran los presos de sus países. Cuando el caso lo ameritaba, los detenidos eran llevados a su país de origen. Tendrían que pasar varios años para que la ciudadanía tuviera conocimiento de las víctimas que esta subterránea colaboración se cobró. La inteligencia militar uruguaya montaría en Buenos Aires su propio centro de interrogatorios: “Automotores Orletti”. Presos argentinos, chilenos y uruguayos serían rutinariamente interrogados en el Departamento de Investigaciones de Asunción por militares y policías de sus propios países.

Uno de los casos paradigmáticos –por estar completamente documentado– es el que comenzó a fines de marzo de 1977 en Asunción donde fueron apresados cinco activistas rioplatenses de movimientos de izquierda. Eran los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Insaurrealde y los argentinos José Nell, Dora Marta Landi y José Logoluso. El caso motivó una amplia movilización de la policía paraguaya que, en los días siguientes, apresó a varias decenas de personas vinculadas a una supuesta organización destinada a proveer documentos falsos a extremistas montoneros. Muy pronto los amigos del “Cóndor” fueron alertados. El 9 de abril de 1977, un comisario paraguayo escribía una nota a sus superiores con el objeto de:

“...elevar a su conocimiento el resumen de las actividades del equipo de trabajo que se constituyó en esta Dirección los días 5, 6 y 7 de los corrientes, integrado por el Cnel. BENITO GUANES y el Tte. 1º ANGEL SPADA y Sgto. JUAN CARLOS CAMICHA, de la Jefatura de Area 234; JOSÉ MONTENEGRO y ALEJANDRO STADA del S.I.D.E., ambos de la República Argentina y el Mayor CARLOS CALCAGNO del Servicio de Inteligencia del Ejército del Uruguay, con relación a los procedimientos efectuados por esa Jefatura...” (Archivos paraguayos. Nota del comisario Alberto Cantero al Jefe del Departamento de Investigaciones, Pastor Coronel).

Los detenidos habían sido torturados e interrogados por un equipo multinacional que compartía la información obtenida y aportaba los datos propios obrantes en su país sobre los antecedentes de cada uno de ellos. A mediados de mayo, fue tomada una decisión: trasladarlos a la Argentina.

“Tengo el honor de dirigirme a esa superioridad con el objeto de elevar a su conocimiento que en el día de la fecha, siendo las 16:34 horas, en un avión bi-reactor de la Armada Argentina con matrícula 5-7-30-0653, piloteado por el Capitán de Corbeta JOSÉ ABDALA, viajaron con destino a la ciudad de Buenos Aires los siguientes detenidos: (...) INSAURREALDE, (...) Santana, (...) NELL, (...) LOGOLUSO, (...) y LANDI (...). Las mencionadas personas fueron entregadas por con-

ducto de esta Dirección, en presencia del Cnel. D.E.M. Don BENITO GUANES y del Cap. de Fragata LÁZARO SOSA, al Tte. 1º JOSÉ MONTENEGRO y JUAN MANUEL BERRET, ambos del S.I.D.E. (Servicio de Inteligencia del Ejército) (...)" (Archivos paraguayos. Nota de Alberto Cantero a Pastor Coronel, 16 de mayo de 1977). [Todos ellos figuran como desaparecidos. Esta nota fue la última noticia que se tuvo sobre ellos.]

Los archivos paraguayos permitieron, además, comprobar numerosos otros casos de intercambio de prisioneros como el de la médica paraguaya Gladys Meillinger de Sannemann, quien realizó un increíble periplo clandestino por las prisiones de la región. Presa en 1976 en la provincia argentina de Misiones fue trasladada, unos meses después, al Departamento de Investigaciones de Asunción. Al año siguiente fue enviada de vuelta a la Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires, de donde, gracias a las presiones del gobierno alemán, logró salir y refugiarse en ese país. Daniel Campos, un dirigente del movimiento campesino paraguayo, huyó de la represión y se refugió en Buenos Aires. Allí fue apresado por policías argentinos y llevado a la Escuela de Mecánica de la Armada. Luego de tenebrosas semanas en esa dependencia, un avión del Transporte Aéreo Militar del Paraguay lo fue a buscar para ser torturado en el Departamento de Investigaciones de Asunción. Recuperó su libertad un año después.

El intercambio de prisioneros no tenía necesidades de contar con infraestructura costosa para ser fluido. En los archivos paraguayos se encuentran varias comunicaciones similares a ésta:

"...Ayer 02 DIC, al mediodía llegó a esta jefatura el S-2 del RI 29 de Monte-FORMOSA (ARG), quien por indicación de su jefe de Rgto. traía en la valijera de su coche para su entrega al ciudadano paraguayo DOMINGO ROLÓN (...). El mencionado ciudadano fue detenido el 17 de octubre 76 en Puerto Pilcomayo (ARG) (...)" (Archivos paraguayos. Informe del Jefe de Policía al Estado Mayor General de las FF.AA.).

Para que este operativo funcionase era necesario que el sistema de códigos y comunicaciones fuera eficaz. Y así fue. Las listas de “subversivos buscados” eran manejadas con sorprendente fluidez por las distintas reparticiones represivas. Los “informes confidenciales” sobre las actividades de grupos sospechosos eran compartidos generosamente. Se unificaron los estilos de los informes de antecedentes. Se adoptó un código común de mensajes cifrados que utilizaban un sistema criptográfico en el que las letras eran sustituidas por grupos de números ordenados de cinco en cinco y que enviaban por télex. Se multiplicaron los ofrecimientos de becas y de cursos de perfeccionamiento para los oficiales jóvenes. Si antes la meta de los militares sudamericanos era conseguir un lugar en una escuela militar de los Estados Unidos, ahora el objetivo era ser nominado a un curso en la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, en alguno de los cuarteles de la DINA en Santiago o en la DEOPS brasileña.

Un fluido intercambio de conocimientos sobre el combate a la subversión tuvo lugar en el Cono Sur. Con la restricción informativa general ocasionada por la censura de prensa y la complicidad de muchos medios, las violaciones a los derechos humanos transcurrieron en un contexto de impunidad. El nombre del “Operativo Cóndor” empezaría, sin embargo, a hacerse conocido.

El primer informe que hace relación a este operativo surge de un agente especial del FBI destinado en Buenos Aires llamado Robert Scherrer que, ya una semana después del asesinato de Letelier, informaba que:

“El ‘Operativo Cóndor’ es el nombre en clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de información secreta relativa a los denominados ‘izquierdistas’, comunistas y marxistas que se estableció recientemente entre los servicios de inteligencia en América del Sur (...). El operativo tiene previstas operaciones conjuntas contra objetivos terroristas en los países miembros. Una tercera fase, y más secreta, implica la formación de grupos especiales de los países miembros que deberán viajar hacia países no miembros para llevar a cabo

castigos incluido el asesinato de terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros del operativo” (Cable de Robert Scherrer al cuartel general del FBI, octubre de 1976).

Los archivos descubiertos en Paraguay traerían a la luz numerosos papeles en los que el nombre “Cóndor” estaba impreso en los documentos oficiales. Cuando la impunidad es demasiado larga, las normas de seguridad se vuelven más flexibles.

Los archivos secretos paraguayos

Si no fuera por la aparición sorpresiva de esas cinco toneladas de documentos secretos de la represión paraguaya en 1992 que permitieron conocer el lado oculto de cuatro décadas de historias oficiales, todavía seguiríamos hablando del “Operativo Cóndor” como un rumor siniestro del cual carecíamos de pruebas.

Los archivos paraguayos se constituyeron en un hito significativo contra la impunidad pues su hallazgo permitió el enjuiciamiento de varios de los principales responsables de la represión. Además de su valor jurídico, esos archivos tienen una gran importancia histórica y didáctica para las generaciones futuras.

Lastimosamente, ha sido ése un caso aislado en el continente pues hallazgos documentales de la misma magnitud no han ocurrido en otros países. En efecto, una de las últimas determinaciones de la Junta Militar argentina antes de abandonar el poder fue la de incinerar toda la documentación referente a los “detenidos-desaparecidos”. Las “Comisiones de la Verdad” de Uruguay, Brasil y Chile reconocieron que no pudieron acceder a prácticamente ninguna documentación oficial que les permitiera aclarar las denuncias recibidas. Lo mismo ocurrió en Bolivia, donde todas las carpetas del Ministerio de Interior y de la Inteligencia Militar que hacían referencia a los detenidos durante el gobierno de Banzer fueron retiradas en camiones del Ejército y siguen con paradero desconocido.

En los últimos años sólo algunos relatos fragmentarios de ex represores “arrepentidos” (casos capitán Francisco Scilingo en la Argentina, Arancibia Clavel en Chile y general Antonio Bandeira en Brasil, por ejemplo) y algunos documentos aislados que por distintos motivos salieron a la luz pública en distintos países pudieron sumarse como pruebas de la existencia de ese operativo multinacional criminal.

Curiosamente, luego de iniciado el proceso contra el general Augusto Pinochet por un juez español, fueron los Estados Unidos los que sacaron a luz un nuevo caudal de documentos desclasificados de dos décadas atrás. Aun con los sesgos que representan los desconocidos criterios de selección de los mismos y sus numerosas tachaduras, constituyen una nueva fuente de información. Resalta en esos papeles la evidencia de que las agencias norteamericanas de información conocían el funcionamiento y las acciones del “Operativo Cóndor” y decidieron no interferir en él.

El ocaso del “Cóndor”

A comienzos de la década de los ochenta este sistema clandestino de cooperación estaba llegando al final de su vida útil. Durante más de un lustro había sido un engranaje fundamental del esquema de represión política masiva empleado en el Cono Sur. Las cifras de la cooperación clandestina no son fáciles de cuantificar. Cerca de ciento veinte uruguayos desaparecieron en la Argentina, además de alrededor de cincuenta ciudadanos paraguayos y otros tantos chilenos y por lo menos una decena de brasileños. Los miembros más activos del “Cóndor” fueron la Argentina y Chile, pero todos los países integrantes sacaron provecho de ese perfeccionado sistema de intercambio de informaciones y prisioneros que había comenzado en 1975. La cooperación entre los demás países participantes arroja cifras menos impresionantes pero que son demostrativas de la gran fluidez del sistema. Es imposible evaluar la cantidad de víctimas capturadas gra-

cias a la función fundamental del Operativo “Cóndor”: el intercambio rápido de informaciones.

En esos primeros años de la nueva década, sin embargo, el “Cóndor” entraría en un gradual ocaso. Por distintos caminos los países de la región comenzaban a recuperar su institucionalidad democrática. Los regímenes militares que habían creado el operativo se preocupaban ahora por borrar las huellas de los crímenes del pasado y asegurar mecanismos jurídicos de impunidad para el futuro. En todos esos procesos de transición, más allá de los formalismos democráticos, los aparatos de represión siguieron teniendo peso e influencia en las decisiones políticas que se tomarían.

Mercosur: una cooperación a la luz del día

El Mercosur se construye sobre las cenizas de aquel proyecto nefasto y con la experiencia, tantas veces común, de nuestras transiciones contradictorias y gatopardistas. Las consecuencias elocuentemente asombrosas que las dictaduras han causado en la sociedad toda hicieron previsible que la preocupación primera de los procesos de reinstitucionalización fuera la de consolidar las incipientes instituciones democráticas y fortalecer el poder constitucional.

Como también era previsible, las Fuerzas Armadas lograron mantener importantes prerrogativas con respecto a su papel tutelar sobre la política interna de nuestros países. En algunos casos, hasta pudieron conducir y controlar los tiempos de la transición y preservar sus privilegios. La principal demanda de los regímenes militares ante los avances de los procesos de transición fue garantizar normas legales que evitaran juzgar el pasado e institucionalizar la posibilidad de seguir actuando internamente frente a una hipotética reemergencia del “peligro subversivo”. De la resolución que los países del Cono Sur dieran a este conflicto dependerían los diversos tipos de democracia que se instalarían en los años siguientes.

Consolidados estos procesos, los países del Cono Sur se sumaron a los grandes cambios mundiales ocurridos en la última década, en especial la potenciación de los múltiples y simultáneos desafíos de la integración y globalización que han tenido un impacto económico, político y social sin precedentes.

Para los países del Mercosur los antecedentes históricos estaban demasiado cercanos y las amenazas de una vuelta al pasado reaparecían con demasiada frecuencia. Por ello acordaron una “cláusula democrática” que excluía al país que rompiera su intitucionalidad democrática. “El que no es demócrata, sale del club”, parecería ser la consigna firmada con alborozo por los representantes de los países del Mercosur.

Sin embargo, ésa es una frase efectista que hay que tomar con cuidado. Cada uno de sus integrantes arrastra déficit democráticos y sociales que se expresan hoy en la limitada participación de actores en los procesos de integración. Este déficit se advierte en el protagonismo, en ocasiones excluyente, de los actores gubernamentales en la formulación de la orientación y negociación de estos procesos y la escasa o nula participación de otros agentes.

A pesar de sus años de funcionamiento, al Mercosur le falta aún un proceso de apropiación del proyecto por parte de la sociedad civil. Mientras eso no suceda, el concepto de solidaridad democrática será una mera enunciación carente de vitalidad. En las esferas de decisión gubernamental sigue ocupando un lugar demasiada gente para quienes los años de plomo –entre otras cosas, los años del “Operativo Cóndor”– son una evocación molesta. Cuando no culposa.

Una manifestación de ese déficit ha sido la percepción que hemos tenido en el Paraguay de la escasa solidaridad demostrada por los gobiernos del Mercosur con respecto a los sangrientos sucesos del reciente marzo. Marzo de 1999 constituyó la gesta ciudadana más importante del siglo en un país carente de referentes simbólicos de autogestión y resistencia popular. Los asesinos y prófugos de la Justi-

cia encontraron en los países del Mercosur un refugio sorprendentemente cálido: Raúl Cubas Grau en el Brasil, Lino Oviedo en la Argentina, el ex ministro de Defensa, Segovia Boltes, y el brazo derecho de Oviedo, Galeano Perrone, en el Uruguay.

El principio de la integración y solidaridad regional, conceptos motores del Mercosur, se ve desvirtuado por intereses que son lejanos al común de los ciudadanos. ¿De qué sirve una integración regional que sigue privilegiando la impunidad? El Derecho de Asilo no fue creado para eso. La protección a los perseguidos políticos no puede confundirse con la impunidad a los delincuentes comunes. Quizás sea por estos déficit del Mercosur que la evocación del no tan lejano “Operativo Cóndor” merezca ser recordada para que nada similar se repita.

REFERENCIAS

- BLIXEN, Samuel. *El vientre del Cóndor*. Ediciones de Brecha, Montevideo, 1995.
- BOCCIA, Alfredo, GONZÁLEZ, Myriam, y PALAU, Rosa. *Es mi informe. Los archivos secretos de la Policía de Stroessner*. Ediciones CDE, Asunción, 1994.
- CALLONI, Stella. *Los años del lobo. Operación Cóndor*. Biblioteca del Pensamiento Nacional, Buenos Aires, 1999.
- GRANDI, Jorge. «Déficit democrático y social en los procesos de integración», en *Revista de Integración y Comercio*, setiembre-diciembre 1998, Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe.
- JELIN, Elizabeth, y HERSHBERG, Eric. *Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina*. Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1996.
- MARIANO, Nilson. *Operación Cóndor. Terrorismo de Estado en el Cono Sur*. Ediciones Lohlé-Lumen, Buenos Aires, 1998.

Programa de Investigaciones Socioculturales en el Mercosur

Títulos publicados:

Serie ***Cuadernos para el Debate***

- Nº 1. HERNÁN VIDAL: “La frontera después del ajuste. De la producción de soberanía a la producción de ciudadanía en Río Turbio”.
- Nº 2. DANIELA URIBARRI: “«Nosotros» y «los Otros» en los manuales escolares: Identidad nacional y Mercosur”.
- Nº 3. MARCELO GUARDIA CRESPO: “Bolivia y Mercosur: en busca de la integración regional”.
- Nº 4. BRENDA PEREYRA: “Más allá de la ciudadanía formal. La inmigración chilena en Buenos Aires”.
- Nº 5. RUBEN OLIVEN: “Algunas claves socioculturales para entender Rio Grande do Sul”.
- Nº 6. VERENA STOLCKE: “¿Es el sexo para el género como la raza para la etnicidad?”.
- Nº 7. ALFREDO BOCCIA PAZ: “«Operativo Cóndor»: un ancestro vergonzoso”.



Instituto de Desarrollo Económico y Social

Aráoz 2838 ♦ 1425 Buenos Aires ♦ Argentina

Tel.: (54 11) 4804-4949 ♦ Fax: (54 11) 4804-5856

Correo electrónico: idesmerc@ides.org.ar